

Editorial

Cinco tesis sobre el proceso de paz

El alto de los cien días del proceso de pacificación es una buena oportunidad para evaluar sus logros y posibilidades, considerando lo conseguido y lo no conseguido y así actuar en consecuencia. Pero al preguntarse por los cumplimientos y los incumplimientos hay que tener muy en cuenta el bien de El Salvador, pues no cualquier cumplimiento sirve al bien general de El Salvador. Esta perspectiva es importante para evitar el conformismo y el pragmatismo fácil.

El proceso ha avanzado en estos primeros cien días, pero aún no es irreversible. Los avances son positivos e importantes, pero no suficientes para garantizar las metas democráticas establecidas en el Acuerdo de paz. Por este lado, el conformismo es un peligro real. Pero, por el otro, los acuerdos pueden perder sus dimensiones más importantes y desembocar en una simple democracia ampliada, con un cierto reacomodo militar, acompañado de cierta limpieza en las filas de la oficialidad del ejército y de alguna moderación en la represión. Este es el peligro del pragmatismo fácil, que con tal de llegar al final, concedería lo que le pidieran, sin caer en la cuenta de la trascendencia de sus concesiones.

Para ayudar a la reflexión e iluminar el camino que queda por delante, formularemos nuestra evaluación en cinco tesis sobre el proceso de pacificación.

- 1. Los incumplimientos del FMLN han sido provocados directamente por los del gobierno. Si el gobierno hubiese cumplido, el FMLN también hubiera cumplido con el calendario de compromisos.**

El 2 de marzo, tal como lo establece el Acuerdo de paz, el FMLN aún no había concentrado a todas sus fuerzas y, por consiguiente, tampoco la totalidad de su armamento, en los lugares señalados, aunque la mayoría de sus ex combatientes y de sus armas ya se encontraba concentrada en dichos lugares. El FMLN acepta no haber cumplido y explica su

incumplimiento por la falta de infraestructura adecuada en los sitios de concentración y, sobre todo, porque el gobierno tampoco había cumplido totalmente con la concentración de las fuerzas de su ejército. El informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad confirma estas explicaciones (ver el Documento especial de esta edición).

El FMLN tampoco desmovilizó el primer 20 por ciento de sus ex combatientes el 1 de mayo, porque aún el gobierno no había implementado los programas económicos y sociales que facilitarían dicha desmovilización, ni había iniciado la transferencia de tierras, ni había establecido los mecanismos para ingresar a la Academia Nacional de Seguridad. Para el FMLN, estos tres elementos son fundamentales para no lanzar a sus ex combatientes al desempleo y a la delincuencia.

Así lo reconoce el Secretario General al afirmar en su informe que "es apremiante cumplir los aspectos que facilitan la incorporación". En consecuencia, ONUSAL y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo "han venido instando al gobierno para que vele porque se apliquen esas disposiciones de conformidad con el calendario convenido y de que se haga un esfuerzo especial por superar las demoras que se han producido" (Informe, 15).

El gobierno, sin embargo, considera la situación del proceso desde un triunfalismo tan exagerado que, en sí mismo, es sospechoso. Según él, en los tres primeros meses, ha cumplido satisfactoriamente con todos sus compromisos o está en vías de cumplirlos. En el proceso sólo encuentra algunos retrasos, que han generado desajustes los cuales, además, estaban previstos. La responsabilidad de los retrasos la hace recaer en COPAZ y en la asamblea.

El Secretario General de Naciones Unidas contradice estas apreciaciones globales del gobierno al señalar que ninguna de las dos partes ha cumplido enteramente con el calendario fijado. Pero el incumplimiento de cada parte no es simétrico. El carácter de la guerra y las exigencias modernizadoras de la sociedad, del Estado y de la economía han puesto en manos del gobierno la mayor parte de los compromisos del Acuerdo de paz, tocándole al FMLN una mínima parte, la cual se concreta en la desmovilización de sus ex combatientes. Por lo tanto, el gobierno es el que menos ha cumplido cuantitativa y cualitativamente.

Las sospechas sobre la veracidad del inventario de armas entregado por el FMLN son legítimas, pero la posibilidad de regresar a la guerra con ellas es sumamente remota. Por una parte, la correlación mundial de fuerzas actual no lo permite; pero, por la otra, sería necesario un esfuerzo enorme para volver a poner en marcha el aparato militar. La no desmovilización de los ex combatientes es entonces un medio para



ejercer una presión muy fuerte, cuya eficacia proviene no de la posibilidad de volver a la guerra, sino del miedo inducido por la propaganda gubernamental. Su poder es más político que militar.

Las desconfianzas mutuas y generalizadas son normales en los procesos de transición, pero no los extremos a los cuales hemos llegado en El Salvador. La guerra y la propaganda destruyeron la poca confianza que había entre los grupos políticos y sociales. Después, el proceso de pacificación ha sido sometido al bombardeo de la desinformación guber-

namental institucionalizada. La tónica del debate político fue dada por las acusaciones y no por la discusión franca de los problemas y de las expectativas de los acuerdos. A esta avalancha, el FMLN respondió esporádicamente y casi siempre dejándose llevar por la dinámica impuesta por los directores de esta campaña desinformativa.

En el Anexo F del Acuerdo de paz ambas partes se comprometieron a abstenerse de toda propaganda o política informativa incongruente con los acuerdos o con el proceso de distensión y reconciliación. Es claro que ni las partes han cumplido este compromiso, ni COPAZ ni ONUSAL han tomado en serio su verificación en este punto tan importante. Se hubiera avanzado mucho más en el proceso si ambas partes, pero sobre todo el gobierno, hubieran usado los medios de comunicación para generar confianza. De todos modos, la desconfianza y el miedo propagados por éste último han sido políticamente muy útiles para el FMLN.

Al FMLN no le interesa ni le conviene no cumplir los acuerdos. No hay condiciones objetivas ni subjetivas para intentar otra alternativa que no sea la de los acuerdos. El poder del FMLN reside en cumplir sus propios compromisos, en el entendido de que el gobierno cumplirá con los suyos, y en el compromiso internacional que garantiza la totalidad del proceso. Esta fue la gran apuesta del FMLN en la mesa de negociación, donde se jugó su futuro políticamente. Por lo tanto, la única forma para presionar a la otra parte para que cumpla con los acuerdos es no cumplir

Los incumplimientos del gobierno no obedecen a mala voluntad. De hecho, ambas partes no se cansan de repetir al que quiera oírlos que tienen buena voluntad. Más aún, cuando ha habido voluntad política, los acuerdos se han cumplido satisfactoriamente, sin importar los formalismos ni las legalidades, que se suelen esgrimir cuando esa voluntad no existe. Este es el caso del cese del fuego, que no se ha violado ni una sola vez por ninguna de las partes. Las partes han respetado el cese del fuego porque no tienen voluntad para regresar a la guerra.

En la actualidad, la lucha se libra en el terreno político. Se trata de abrir los espacios políticos y sociales, tal como está previsto en el Acuerdo de paz. Para el FMLN, la cuestión crucial está en asegurar estructuralmente la posibilidad para acceder al poder del Estado democráticamente o para constituirse en una oposición política real. Desde ambas instancias, desde el Estado o desde la oposición, piensa promover y defender los puntos de vista y los intereses de las mayorías.

Para los sectores políticos y militares que tradicionalmente han acumulado, retenido y usufructuado ese poder de manera antidemocrática e inconstitucional, la cuestión es ceder el menor espacio político posible al FMLN, pues temen que éste pueda cuestionarles seriamente su mono-

polio del poder. Esos sectores son los que no han permitido que el gobierno avanzara en el cumplimiento de los acuerdos conforme al calendario, e incluso lo han llevado a violarlos.

Los sectores contrarios a los alcances democráticos de los acuerdos trabajan aceleradamente para encontrar la manera de desvirtuarlos, reduciendo sus alcances modernizadores o simplemente haciendo caso omiso de ellos. Lo que no consiguieron militarmente, lo quisieran conseguir manipulando los acuerdos. Erróneamente, quieren tratar al FMLN como si fuera un ejército derrotado que se reintegra a la vida civil a partir de un tratado de rendición. El Acuerdo de paz no es un tratado de rendición para ninguna de las partes y mucho menos para el FMLN.

2. Ambas partes deben respetar el principio clave de la negociación, que privilegia la dimensión política del Acuerdo de paz.

Al FMLN no le preocupan tanto los retrasos en el calendario de compromisos, sino los incumplimientos y las violaciones gubernamentales, que obstaculizan la desmilitarización de la sociedad. Las mayores dificultades han surgido alrededor de los acuerdos destinados a desarticular el aparato represivo gubernamental y las estructuras que han permitido que la Fuerza Armada tenga un peso específico determinante en la sociedad.

La falta de progreso en este campo es lo que ha impedido cumplir con los otros acuerdos vinculados a éstos, imposibilitando así la desmovilización e incorporación de los ex combatientes del FMLN a la sociedad civil. Aunque el cumplimiento de una parte no está vinculado explícitamente al cumplimiento de la otra, la estructura de los compromisos en el Acuerdo vincula implícitamente un cumplimiento a otro.

El Secretario General de Naciones Unidas señala en su informe que las dificultades más arduas en la fase de la separación de fuerzas las presentó la Fuerza Armada; pero esas dificultades se volvieron considerables en el caso de los dos cuerpos de seguridad que deben ser disueltos, al punto de violar el acuerdo. El anteproyecto de ley de servicio militar lo considera incompatible con el Acuerdo de paz y, por último, el informe observa que la Fuerza Armada entregó sus inventarios de efectivos y armas incompletos y con demora.

La otra cara de la desmilitarización, la Policía Nacional Civil, también es objeto de seria preocupación para el FMLN. Es fácilmente constatable que los retrasos acumulados no se deben a COPAZ, tal como el gobierno quiere dar a entender. Aquí también el gobierno ha caído en incumplimientos y violaciones. El Secretario General llega a afirmar que en todo esto el gobierno ha actuado en sentido contrario a lo dispuesto en el Acuerdo de paz. Esta falta de avance en materia de seguri-

dad pública confirma la reticencia del FMLN para comenzar la desmovilización de sus ex combatientes, puesto que, de hecho, no se han generado las condiciones políticas que la faciliten. En resumen, el informe demuestra que, en los tres primeros meses del proceso, el gobierno sólo se ha comprometido a medias, ha hecho el mínimo aceptable y todo ello con demoras y a regañadientes.

La desmovilización de los ex combatientes no representa un grave problema práctico para el FMLN. La dificultad se encuentra a nivel político. El poder simbólico que tiene la no desmovilización es uno de los pocos recursos con que cuenta el FMLN para presionar al gobierno a cumplir con sus compromisos. La no desmovilización de los ex combatientes es una muestra palpable del poco progreso del Acuerdo de paz. Significa que no se ha logrado una de las metas fundamentales de la negociación. Pero ello es así no por mera terquedad del FMLN, sino porque el gobierno no ha cumplido con toda la serie de compromisos que deben hacer posible la desmovilización.

El FMLN cometería un gravísimo error político y ético si a última hora desmovilizara a sus ex combatientes sin garantizarles una salida digna y humana, lo cual hace imprescindibles los acuerdos sociales y económicos, así como también la posibilidad para ingresar en la Academia Nacional de Seguridad. De todo esto se concluye que todavía no existen las condiciones políticas necesarias para permitir la desmovilización y reincorporación de los ex combatientes del FMLN en la sociedad civil.

En la mesa de negociación se estableció que el calendario se ordenaría de tal manera que el cumplimiento de los acuerdos políticos abriera los espacios para la disolución del ejército del FMLN. En consecuencia, primero deben cumplirse los acuerdos de carácter político y después, gradual y correspondientemente, se deberá desmontar la estructura militar del FMLN. El calendario supone que el gobierno proporcionará las condiciones políticas necesarias para hacer posible, en un segundo momento, la desaparición del ejército rebelde.

El FMLN no se comprometió a cumplir sus compromisos aun cuando el gobierno no cumpliera con los suyos. Si no se ponen las condiciones pactadas como necesarias, el proceso difícilmente puede continuar. De ahí la importancia trascendental de Naciones Unidas, representante directo de la comunidad internacional, en cuanto garante del calendario de compromisos. El FMLN no puede arriesgarse a cumplir cabalmente, prescindiendo de lo que haga la otra parte. Por lo menos no puede hacerlo sin contar con el compromiso decidido de la comunidad internacional, representada por Naciones Unidas, puesto que el gobierno todavía no está comprometido de manera irreversible con el Acuerdo de paz.

En este contexto, Naciones Unidas debe presionar de tal manera que el gobierno cumpla su parte y así haga viable el cumplimiento de la otra. El FMLN ha declarado claramente que "no tendría problema alguno para respetar el calendario, sin esperar a que el gobierno lo hiciera, si se daba seguridad de que terceras partes velarían para que el gobierno cumpliera también con sus obligaciones" (Informe, 60). En consecuencia, sin la existencia de estos terceros, que obliguen a las partes, pero sobre todo al gobierno, a no retroceder, el Acuerdo de paz perdería su fuerza y su sentido.

- 3. Los obstáculos que ha encontrado el proceso de pacificación se deben también a que la clase política ha sido marginada y a que carece de cuadros suficientes y con la formación necesaria para dirigir y administrar la cosa pública.**

A nivel interno, COPAZ era la instancia llamada a dirigir y supervisar el cumplimiento de los acuerdos, pero en los tres primeros meses, pese al entusiasmo inicial, no ha podido convertirse en una plataforma para llegar a consensos, sino que ha tendido a convertirse en una plataforma de confrontación estéril, donde tropiezan los compromisos de las partes. Los recursos preferidos por los enemigos del proceso son el reduccionismo, por medio del cual siempre buscan en los acuerdos el mínimo indispensable, y el legalismo, por medio del cual interponen presuntas barreras jurídicas. En la actualidad, la dinámica de COPAZ está marcada por los bloques partidarios contrapuestos.



Los partidos ni siquiera han sido capaces de mantener el nivel de representatividad partidaria en COPAZ, causando graves trastornos de efectividad, coherencia y continuidad. Esta ausencia de los dirigentes de los partidos indica lo poco que valoran el proceso de paz, que debería ser su primera ocupación y preocupación. Para los políticos, en el mejor de los casos, COPAZ es una plataforma partidista más. A esta displicencia se suma la falta de infraestructura administrativa, técnica y ejecutiva.

Esto quiere decir que COPAZ ya no se encuentra a la altura de las tareas consensuales y reconciliadoras que las partes le atribuyeron. Los partidos políticos no participaron directamente en la negociación, por tanto, desconocen el proceso desde dentro, ignoran lo no escrito y negociado. Cuando quisieron participar por iniciativa propia, se presentaron con una propuesta que ya estaba superada en la mesa. En suma, ni participaron ni fueron elementos de consenso dentro de la negociación misma.

Pese a ello y en lugar de asumir el reto de promover desde COPAZ los consensos nacionales necesarios para la reconciliación efectiva, a la mayoría de los partidos políticos le resulta muy difícil identificarse con el proceso surgido del Acuerdo de paz y todavía más promover y defender algo que otros acordaron. El interés de la nación no es suficiente para mover a estos partidos, orientados casi exclusivamente al evento electoral y muy marcados por el oportunismo político. En realidad, les es muy difícil levantar la mirada más allá de sus mezquinos intereses partidarios para ocuparse del interés de todo el país.

Por otro lado, esos partidos saben que el poder decisorio de la negociación y de la implementación de los acuerdos está en la cúpula de las partes y en terceros, que no son ellos. De hecho, perciben correctamente que no tienen mucho espacio político, lo cual se ha confirmado en las reuniones recientes de las cúpulas para poner al día el calendario.

Desconocedores, desinteresados y desidentificados del proceso, los partidos políticos se han dedicado a preparar lo que mejor saben hacer, las próximas elecciones, lanzando con gran anticipación sus respectivas campañas. Hasta el FMLN se ha visto arrastrado por esta tendencia partidista electoral.

La oposición política, por otro lado, no ha tenido el poder ni la capacidad necesarios para reorientar la dinámica de COPAZ y ha debido dejar en manos de las cúpulas de las partes toda la dirección del proceso. Ni siquiera dentro de ella misma ha podido mantener el consenso necesario para presentar un frente común y promover los intereses nacionales. La ambición política personalista y el acaparamiento del respaldo político internacional, y de los fondos que vienen con él, han



llevado a que el MNR abandonara Convergencia Democrática, decidido a ensayar un protagonismo poco viable, tal como lo están demostrando las primeras encuestas electorales, que le conceden una migaja del pastel electoral.

En el mismo FMLN, los vanguardismos no son visibles todavía, pero sus primeros pasos como fuerza política transpiran el protagonismo clásico de las otras fuerzas políticas de la izquierda. El FMLN se encuentra cada vez más cerca del peligro de convertirse en un partido más, traicionando sus propios ideales programáticos y las esperanzas de las mayorías populares.

Por otro lado, la tarea de implementación de los acuerdos ha demostrado ser muy superior a las capacidades de los dirigentes y administradores del Estado y de la clase política en general. La reforma institucional propuesta está más allá de las costumbres inveteradas de los funcionarios públicos y de los administradores del Estado y del mercantilismo predominante entre los empresarios salvadoreños y los funcionarios de ARENA.

En la actualidad, la posibilidad para modernizar el país está en manos de funcionarios que están demostrando su incapacidad política y técnica para administrar la cosa pública, porque no se puede decir otra cosa de un gobierno que casi paraliza el país al dejarlo sin energía eléctrica por falta de previsión. Es voz pública que la corrupción también corroe al gobierno actual, incluso en un grado mayor que al gobierno demócrata cristiano anterior. El caso del nuevo director de la Policía Nacional Civil a quien se le permiten actividades liberales junto con las propias de su cargo, es otro buen ejemplo de todo esto.

La diversificada oferta de seminarios sobre la democracia, la legislación y los derechos humanos que ha proliferado en los hoteles capitalinos es adecuada para ambientar y promover, pero no puede considerarse como la respuesta efectiva para el reto de las reformas previstas y necesarias.

Así, pues, una de las mayores hipotecas del proceso está en la ausencia de funcionarios capaces y honestos. En muchos casos no se trata tanto de mala voluntad como de mala formación política y administrativa. Ciertamente, la decisión para hacer las reformas es de los políticos, pero su implementación requiere de recursos técnicos, que están fuera del alcance de los funcionarios actuales. Ni la formación ni la honestidad se consiguen de la noche a la mañana ni se improvisan, pero ambas son necesarias para superar efectivamente las deficiencias que obstaculizan la reforma institucional de gran envergadura que El Salvador necesita.

4. El futuro del Acuerdo de paz se encuentra en el poder negociador de las dos cúpulas.

Después de varios intentos malogrados para poner al día el calendario de acuerdos, los encuentros privados entre la comandancia del FMLN y el presidente Cristiani han comenzado a producir resultados positivos para la marcha del proceso de pacificación. El propio presidente ha anunciado que el FMLN concluirá su concentración e iniciará la desmovilización de sus ex combatientes. Si el FMLN ha dado este paso, el gobierno ha accedido a poner al día todos sus compromisos de carácter político.

El inicio de la desmovilización, obviamente, facilita el proceso de legalización del FMLN como partido político, a lo cual ya se ha comprometido el presidente Cristiani al tomar la iniciativa de ley para reformar el Código Electoral y suprimir las barreras legales que lo impedían.

Todo esto confirma la marginalidad de los partidos políticos y de las organizaciones populares. Las dos cúpulas han resuelto entre ellas, con la asesoría de ONUSAL, las dificultades y el reacomodo de los acuerdos.

Esta dinámica cupular es la que también ha permitido un acercamiento entre la dirección del FMLN y un sector de la empresa privada. Uno de los muchos institutos que recientemente han proliferado en el país permitió esta aproximación, que, en principio, habría desbloqueado las posibilidades para que ANEP participara en el foro. Si al final ANEP como tal no se integra al foro de concertación, será necesario recurrir al encuentro directo del sector más abierto de la empresa privada con la dirección del FMLN.

El acercamiento y el diálogo de las dirigencias de la empresa privada y del FMLN son positivos y necesarios, pero existe el grave peligro de confundir los planos e irrespetar las autonomías, dañando la independencia del movimiento popular. Por otro lado, teóricamente, la contraparte de ANEP debiera ser la representación obrero campesina, que no acaba de perfilarse claramente. Este es un factor más que no contribuye a que ANEP considere seriamente su participación en el foro. Así, pues, el sector popular tiene el peligro de llegar al foro con un poder subsidiario, derivado de las gestiones del FMLN. En definitiva, el papel del sector laboral dependerá del de las cúpulas.

Si bien la intervención directa y exclusiva de las cúpulas está logrando sacar adelante los retrasos del calendario, puede tener un costo muy elevado al reforzar el verticalismo y el autoritarismo. Su necesidad manifiesta la ausencia de estructuras que garanticen la viabilidad del proceso de pacificación. En definitiva, ésta depende de las palabras del presidente y de la dirección del FMLN. Con esta intervención al nivel más alto se consigue un bien inmediato para el país, pero se corre el grave peligro de no permitir el crecimiento ni la formación de las mayorías populares al excluirlas de las decisiones importantes.

La dinámica misma del proceso de pacificación está consolidando la exclusión de los sectores populares, que también fueron excluidos de la negociación. Las mayorías populares, organizadas y no organizadas, deberían ser un componente importante para dinamizar el proceso. Tanto el gobierno como el FMLN deberían abrir más espacios para esa participación popular, puesto que, ciertamente, los actuales no son suficientes. Si ahora no se aprovechan todas las oportunidades que el proceso de cumplimiento del Acuerdo de paz ofrece para abrir esos espacios, se corre el riesgo de desembocar en una democracia restringida, donde los asuntos públicos los deciden los políticos.

El FMLN está asumiendo este riesgo porque considera que lo más importante es consolidar los acuerdos orientados a la desmilitarización de la sociedad y al establecimiento de una nueva estructura de seguridad pública. De hecho, es el aspecto más difícil y el que más resistencias está ofreciendo. Esta dinámica del proceso, que surgió en la negociación misma, lleva a dar menos importancia o a posponer los aspectos sociales y económicos.

Esta opción obedece a que el FMLN considera que si la desmilitarización no se da, el proceso habrá fracasado en su totalidad. Por tanto, este sería el momento para poner todo su peso y su fuerza en conseguirla, tanto más por la resistencia que presenta, para trabajar más tarde en el área socioeconómica. Sin el peso enorme de la estructura militar, el FMLN piensa que será mucho más fácil promover los derechos sociales,

económicos y humanos de las mayorías populares. Si la desmilitarización no se lleva a cabo ahora, será casi imposible luchar por ella y por lo demás en el futuro. La opción del FMLN está orientada a establecer las condiciones necesarias para lanzar después su programa social y económico en beneficio de las mayorías populares.

Al gobierno nunca le ha interesado fortalecer la organización popular, ni mucho menos darle participación en el proceso de decisiones más importante del país. Esta actitud tradicional está manifiesta en sus programas de compensación social, los cuales están orientados a aliviar los efectos de la pobreza masiva, pero desde la institucionalidad gubernamental, entendida vertical y autoritariamente. En consecuencia, los programas son canalizados a través de las municipalidades, controladas en su mayoría por el partido gobernante. El gobierno ni siquiera ve con buenos ojos la participación de las organizaciones no gubernamentales en el plan de reconstrucción nacional, mucho menos la de aquellas otras organizaciones comunitarias o locales conformadas en las zonas conflictivas a lo largo de la guerra.

El presidente Cristiani todavía no se ha atrevido a apelar al pueblo para que lo apoye en su compromiso con la pacificación del país. Las encuestas de opinión pública dan que, en este punto, el presidente encontraría un apoyo masivo en el pueblo salvadoreño. Pero para el presidente Cristiani, tal como lo expresó en su último discurso, el pueblo es el voto del día de las elecciones. En efecto, en su discurso del 1 de junio, sólo se enorgulleció del voto popular que le dio la presidencia. La importancia trascendental que tiene el Acuerdo de paz para el futuro del país y la obcecación de algunos sectores sociales poderosos que tratan de bloquearlo debería ser motivo suficiente para que el presidente apelara directamente al pueblo.

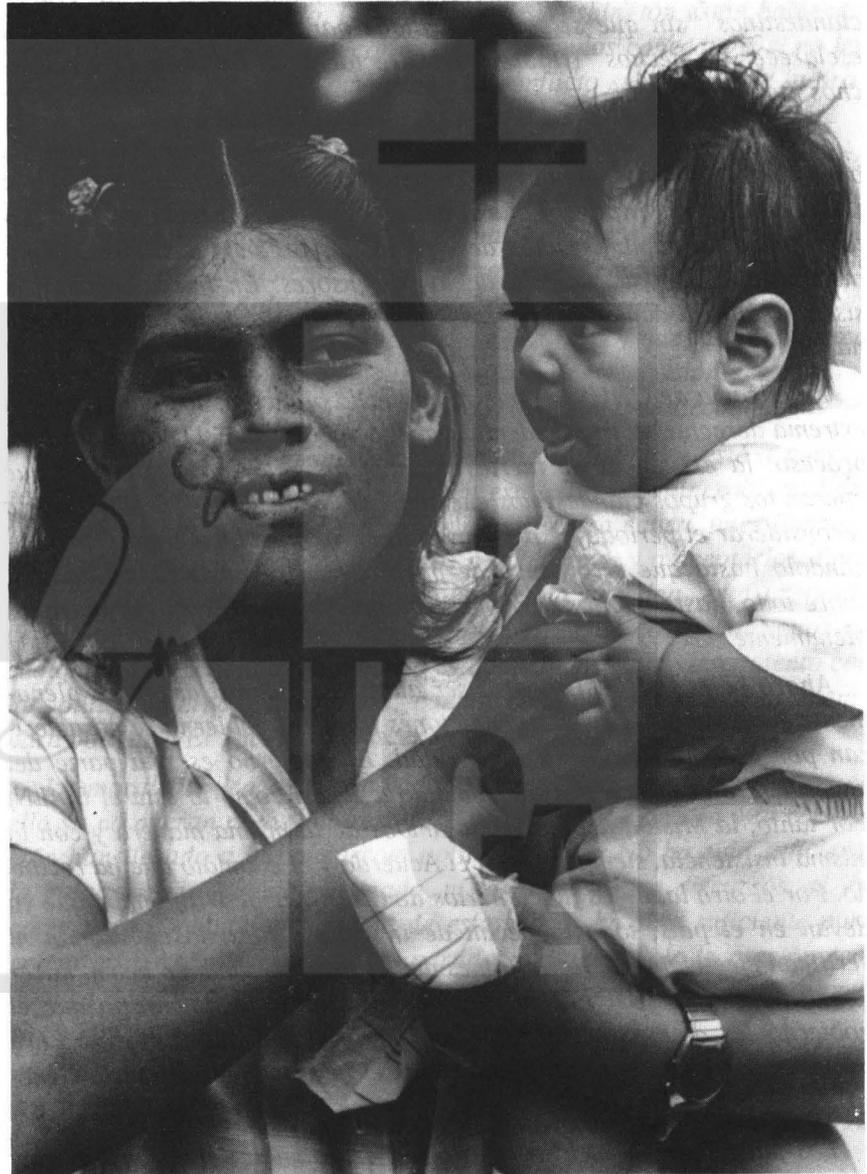
El compromiso de los acuerdos es tarea de todos los salvadoreños, así como lo es la construcción de un nuevo país democrático y justo. Aunque este incumplimiento no se encuentra en ninguno de los tres balances presentados a los cien días, debe señalarse y corregirse.

5. La garantía para cumplir fiel y cabalmente el Acuerdo de paz se encuentra en terceras partes, es decir, en Naciones Unidas, en los países amigos del Secretario General y en Estados Unidos.

La comunidad internacional no se ha desentendido del proceso salvadoreño después de la firma de la paz, sino que se halla presente a diversos niveles. El primero y más visible es el de ONUSAL. Esta misión de observadores sigue día a día la implementación de los acuerdos en nombre de la comunidad internacional. Después de sus primeras vacilaciones y timideces, ha ido tomando un papel más activo y, en consecuen-

cia, su peso en el proceso ha ido siendo cada vez más determinante.

El informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad ha sido determinante para desenmascarar la propaganda gubernamental y forzar al gobierno a cumplir sus compromisos, lo que, por otro lado, ha permitido que el FMLN decida cumplir con los suyos, poniendo al día el calendario en un plazo breve.



El cuarto informe de la división de derechos humanos de ONUSAL, que acaba de ser publicado, denuncia la precaria situación en la que aún se encuentran dichos derechos, pues aunque ha disminuido el número de denuncias, "el cuadro general sigue siendo preocupante" por la persistencia de las ejecuciones sumarias y las muertes violentas sin que se hayan llevado a cabo acciones eficaces para ponerles término, investigarlas y castigar a sus autores. Asimismo, señala la repetición de las amenazas contras ciertas organizaciones no gubernamentales, sindicatos, iglesias y dirigentes políticos y de las manifestaciones de grupos clandestinos "sin que se tomen medidas para impedir su actuación y esclarecer los hechos" (Informe del director de la División de los derechos humanos, 2).

ONUSAL debe seguir insistiendo, tal como lo hace en este informe, para que el gobierno atienda sus recomendaciones y para que se haga la tan necesaria reforma estructural del sistema judicial incluyendo el sistema penal, la administración de justicia, sus órganos auxiliares, el ministerio público y la función de los defensores. En buena medida, el sistema judicial actual es responsable directo de la impunidad predominante.

La eficacia de ONUSAL, que la ha hecho blanco de los ataques de la extrema derecha, su trascendental papel como garante y verificadora del proceso, la existencia de fuertes resistencias y la impunidad con que operan los grupos clandestinos enemigos de los acuerdos, deben llevar a reconsiderar el período de permanencia de la misión en el país, prolongándolo hasta que el proceso de pacificación se haya consolidado y, sobre todo, hasta que los derechos humanos se encuentren garantizados plenamente.

Ahora bien, ONUSAL podría ser aún más eficaz si asumiera plenamente su mandato, pues sus actuaciones frente al gobierno se caracterizan por la inhibición y la ingenuidad. El gobierno es una parte del acuerdo y, en cuanto tal, está sometido a él, así como lo está el FMLN. Por tanto, la Misión debe exigir a ambos de la misma manera y con la misma insistencia, siempre según el Acuerdo y el mandato que ha recibido. Por el otro lado, los funcionarios de ONUSAL, pese al tiempo que ya llevan en el país, todavía pecan de ingenuos, pues no cuestionan ni verifican efectivamente los informes del gobierno —también deben hacer lo mismo con los del FMLN. Tienden a aceptar fácilmente lo que el gobierno les dice, concediéndole una credibilidad que no tiene. Para comprobarlo basta con leer atentamente el informe del Secretario General.

Los países amigos del Secretario General también han seguido muy de cerca el desenvolvimiento del proceso, han estado atentos a sus lo-

gros y a sus obstáculos, han hecho saber su desaprobación ante los incumplimientos y las violaciones, y han hecho sentir su presión, condicionando los fondos comprometidos para el desarrollo y para la transición misma.

Estados Unidos también ha hecho saber su compromiso con los acuerdos y con el que los apoye. Altos jefes militares estadounidenses han visitado a sus colegas salvadoreños para comunicarles personalmente la decisión de su gobierno y para advertirles que el golpe de Estado no tendría respaldo. Los políticos de Washington están haciendo sentir su presión y amenazan con retener los fondos concedidos si no les aclaran la situación de los acuerdos y el conflicto surgido sobre la propiedad de la hacienda El Espino.

Todo ello muestra cuál es la tercera fuerza en la que el FMLN confía y qué poder tiene para hacer que el gobierno cumpla. Al mismo tiempo, es lamentable que el poder real de los países amigos y de Estados Unidos radique exclusivamente en el control que tienen sobre los fondos necesarios para El Salvador. Esto quiere decir que las fuerzas políticas salvadoreñas sólo entienden el lenguaje del dinero y que la única forma para obligarlas a cumplir con sus compromisos internacionales e incluso nacionales es amenazar con retirar o retener la ayuda económica.

La debilidad y la dependencia hacen que El Salvador esté a merced de los que tienen poder económico. En este caso, la vulnerabilidad del país está siendo utilizada para servir a una buena causa, pues fuerza a los sectores enemigos de los acuerdos a doblegarse y a aceptarlos. Pero no hay que llevarse a engaño, porque, en la práctica, esta profunda dependencia deja al país a disposición de los deseos y caprichos de cualquier congresista o funcionario estadounidense que, descontento con la política interna salvadoreña, cuenta con un poderoso instrumento para obligar a El Salvador a hacer su voluntad.

La moral pública de El Salvador se encuentra en quiebra, pues en ella ya no operan ni los valores ni los principios. La guerra y la corrupción han llevado a la bancarrota política y ética. No ha sido suficiente la palabra presidencial empeñada, ni la firma, ni los discursos, ni los compromisos públicos. Ninguna de estas cosas ha sido suficiente para comprometer al gobierno y a los partidos políticos. Sólo la presión económica tiene poder suficiente para asegurar el respeto a los compromisos adquiridos.

San Salvador, 17 de junio de 1992.